

URGENTE RECURSO DE REPOSICION 08001310500320241002000 RE: NOTIFICACIÓN AUTO REMITE POR REGLAS DE REPARTO TUTELA 2024-10020

Desde Jorge Arturo Rivera Tejada <jriveratejada@hotmail.com>

Fecha Mié 20/11/2024 12:35

Para Juzgado 03 Laboral Circuito - Atlántico - Barranquilla <lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Notificaciones Tutelas Civil <notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co>

 1 archivo adjunto (305 KB)

URGENTE RECURSO DE REPOSICION 08001310500320241002000.pdf;

CARTAGENA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Juzgado 03 Laboral - Atlántico - Barranquilla lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. M

RADICACIÓN: 08001310500320241002000

DEMANDANTE: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DEMANDADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.346.928 de Barranquilla, interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO FECHADO 20 DE OCTUBRE EN EL CUAL REMITEN A LA CORTE SUPREMA**,

I. Competencia del juzgado del circuito

Me permito exponer los argumentos por los cuales la competencia de esta acción de tutela corresponde al Juez del circuito de la jurisdicción ordinaria de la ciudad de Bucaramanga.

1. **Factores de competencia en relación con acciones de tutela.** La Corte reitera en auto A 191 de 2021 que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, **existen exclusivamente tres factores de competencia** en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial^[1], (ii) el factor subjetivo^[2] y (iii) el factor funcional^[3]. Al respecto, la **Corte de cierre constitucional ha sostenido que, cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, “en virtud del criterio a prevención”^[4]**, previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Esto, por cuanto **“existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover”^[5]**.

Manifiesto que vivo en Barranquilla y mi elección de lugar de presentación de pruebas y sede es Barranquilla.

2. Tutela contra autoridad administrativa que goza de autonomía administrativa y de ejecución del nivel nacional debe ser repartida a los circuitos. No se demanda al Consejo Superior de la Judicatura.

Manifiesto que esta demanda **no está dirigida contra el Consejo Superior de la Judicatura** por que las pretensiones del amparo constitucional son de exclusivo resorte y autonomía de la EJLB, pues los hechos que acá se discuten tiene exclusiva relación con la calificación de la subfase general del IX curso de Formación Judicial y sus efectos. Actuación administrativa que el Consejo Superior ni siquiera conoce en segunda instancia. Si bien el Consejo Superior reglamentó la Convocatoria 27 y el IXCurso, no estoy demandando esa reglamentación o sus efectos.

Frente a la naturaleza como autoridad administrativa de la EJLB, la ley 270 Estatutaria de Administración de Justicia establece:

ARTÍCULO 177. ESCUELA JUDICIAL. La Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», hará parte del Consejo Superior de la Judicatura, junto con su planta de personal, a partir del primero de enero de 1998 y se constituirá en el centro de formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio de la Administración de Justicia.

El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará su funcionamiento.

...

(Expresiones "la respectiva Sala", y "la Sala Administrativa del Consejo Superior" sustituidas por el artículo 88 de la ley 2430 de 2024).

A su vez el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó la naturaleza de la EJLB como es una unidad administrativa del CSJ que goza de **autonomía administrativa y de ejecución** mediante el Acuerdo 800 de 2000 vigente sin modificaciones según lo establece la relatoría del CSJ en

<https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=5548> , veamos:

ARTICULO PRIMERO.- Naturaleza. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley 270 de 1996, es una unidad administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adscrita a la Sala Administrativa.

ARTICULO QUINTO.- Autonomía administrativa y de ejecución. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, gozará de la autonomía administrativa, técnica, de ejecución y del gasto para el desarrollo del Plan Anual de Formación y Capacitación de la Rama Judicial previamente aprobado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, podrá delegar en el Director de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la celebración de todos los negocios jurídicos que se requieran para el cumplimiento de los programas y actividades que forman parte del mencionado plan, en los términos utilizados para los Directores Seccionales de Administración Judicial.

Delo hasta acá expresado se concluye que la directora de la Escuela no es magistrada, ella representa una autoridad administrativa de la naturaleza ya citada.

Las reglas de reparto contenidas en **DECRETO 333 DE 2021** "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del **Decreto 1069 de 2015**, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela" en su artículo ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. determinan:

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo [37](#) del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(...)

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

(...)

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que

pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

La reglamentación antes citada determina que las tutelas dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, en razón a que pretende proteger el rango de un alto tribunal de rango nacional. Pero siendo esta demanda dirigida en contra de la EJLB esa regla no debe ser aplicada pues esta es una **autoridad administrativa** que no tiene la categoría de alto tribunal de rango nacional.

En el contexto de la acción de tutela, **autoridad administrativa** se refiere a cualquier entidad o dependencia del Estado que, en el ejercicio de sus funciones oficiales, pueda afectar los derechos fundamentales de las personas. Esto incluye a entidades o dependencias que emiten actos administrativos, los cuales son manifestaciones de voluntad de la autoridad que buscan producir efectos jurídicos particulares o generales.

La reglamentación de la acción de tutela, sus normas procesales no entienden autoridad administrativa de manera general y en esa categoría están incluidas entidades o dependencia adscritos o vinculadas, pues estas naturalezas no son tenidas en cuenta por el procedimiento de la acción de tutela, La característica que hace que una autoridad administrativa sea demandada en acción de tutela es su capacidad de afectar derechos fundamentales. En el caso que nos convoca como se ha dicho demandando exclusivamente a la EJLB como autoridad administrativa, con la capacidad de afectar mis derechos fundamentales de manera autónoma y sin intervención de la entidad a la que es adscrita.

Asuntos de procedibilidad.

La procedibilidad de la acción de tutela en el contexto de concursos de méritos es un tema que ha sido abordado por la jurisprudencia, especialmente por la Corte Constitucional (SU 068 de 2022 expedida por hechos de este mismo concurso) y el Consejo de Estado (citadas en la página). La tutela es viable cuando se presenta una flagrante violación de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, la igualdad, y el debido proceso, en el marco del concurso de méritos[6]

1. **Excepcionalidad de la Tutela:** La acción de tutela es un mecanismo excepcional que puede proceder en el contexto de concursos de méritos cuando se busca proteger derechos fundamentales que han sido vulnerados y no existe otro medio judicial eficaz para hacerlo de manera rápida y urgente. Esto es particularmente relevante cuando no se ha configurado una lista definitiva que reconozca derechos subjetivos de los participantes[7].

2. **Subsidiariedad e Inmediatez:** La tutela como sabemos solo procede cuando no hay otro medio de defensa judicial disponible, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un **perjuicio irremediable Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable..** Además, debe ser un instrumento de protección inmediata para garantizar la guarda efectiva de los derechos fundamentales[8]. O cuando se requiere como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La tutela es procedente cuando los medios judiciales ordinarios no garantizan la inmediatez y eficacia necesarias para proteger los derechos fundamentales involucrados, debido a la complejidad y duración de los procesos contenciosos administrativos[9] La tutela puede proceder cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales del solicitante[10].

Tenga en cuenta **señor(a) juez que de no ingresar prontamente**, así sea de manera transitorio al Subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial, perderé la oportunidad acceder al servicio público en las cargos ofertados porque un proceso ordinario demoraría más de un año y esta subfase terminaría en agosto del año entrante, porque aunque la justicia ordinaria conceda las pretensiones es un sobre costo para el estado volver a abrir un curso de formación máxime cuando este ha generado un costo de 14.mil millones de pesos[11] y en el hay capacidad para 3459 beneficiarios y en la actualidad en la subfase especializada son beneficiarios de del IX Curso entre 1500 y 2000 concursantes, se puede concluir que mi inclusión transitoria en el IX curso no afecta fiscalmente a la entidad[12].

LA **SU 067 de 2022** expedida por hechos generados por este mismo concurso advierte que es procedente acción de tutela cuando **existe un planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo**. Advierto señor juez que el conflicto constitucional que acá se discute tiene dos asuntos constitucionales que desbordan las competencias del juez administrativo, veamos:

El primero es sobre el cumplimiento de una cláusula constitucional contenida en el Art. 125 superior que obliga a que los cargos de jueces y magistrados de tribunales deben ser seleccionados por sistema de méritos. Cabe resaltar señor(a) juez que los actuales aprobados de la convocatoria 27 no alcanzaran para proveer la totalidad de las actuales vacantes.

El segundo problema de relevancia constitucional es la materialización de la independencia judicial^[13], como garantía del estado de derecho o derecho humano contenido en el 228 superior. El precedente del SIDH ha establecido que la independencia judicial es un derecho humano autónomo de los justiciables, que materializa la expedición de decisiones justas. La independencia judicial es una garantía institucional e instrumental, pues de ella depende la garantía de otros derechos, como el de acceso a la justicia y al debido proceso^[14].

El SIDH desarrolla estándares de la independencia judicial entre ellos los siguientes:

1. Adecuados procesos de nombramiento con garantías de objetividad y por sistema de méritos. [En 2009 la Relatoría especial misión Colombia para la independencia alertó](#) sobre los índices de provisionalidad y los sistemas de méritos, para la época (2009) sobre todo en Fiscalía General de la Nación^[15]. Se advierte que en la actualidad más o menos la tercera parte de los cargos de jueces están en provisionalidad. Las altas provisionalidades en la justicia no le dan garantía al operador judicial en el ejercicio de función.
2. Inamovilidad en el cargo: la provisionalidad impone en el juez una carga de eventual remoción del cargo, afectando con ello la independencia judicial, en Colombia se ha detectado que los jueces en propiedad no logran llegar a ser magistrados de alta Corte. Las recomendaciones de la relatoría por la independencia judicial antes citada expresaron al respecto:

e) En lo que respecta a la seguridad en el cargo, la inamovilidad, las medidas disciplinarias y la inmunidad:

- i) Debe irse progresivamente incrementando el número de jueces y fiscales con nombramientos permanentes;**
- ii) Debe reducirse la participación de personas ajenas a la Rama Judicial en el nombramiento de jueces y fiscales;**
- iii) Debe establecerse garantías específicas para asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales durante el período de prueba posterior a su nombramiento;**
- iv) Debe asegurarse la inamovilidad de Magistrados, jueces y fiscales;**

A/HRC/14/26/Add.2
Página 29

- v) Deben desarrollarse criterios para el retiro de Magistrados y jueces;**
- vi) Toda decisión relativa a la imposición de una medida disciplinaria debe ser motivada, pública y sujeta a revisión.**

3. Garantía contra presiones externas, Colombia tiene alertas al respecto. Medios de comunicación, el gobierno, otros jueces. Se detectaron casos de jueces destituidos por una causal disciplinaria que se denominaba “error judicial inexcusable”

Como podrá apreciarse señor juez constitucional el amparo de estos dos asuntos constitucionales no es de competencia del juez administrativo. Y menos en lo relacionado con los concretos hechos que acá expongo y desde la individualidad, pues la pretensión que me ampararía mis derechos tendría como finalidad demandar al legalidad de 2 actos administrativos que me calificaron el examen de la subfase general con la finalidad de aprobar

esta subfase o demandar todo la actuación administrativa llamada IX curso de Formación Judicial con los costos fiscales que ello implique.

En su momento la **SU 067 de 2022** considero procedente la acción de tutela y expresó:

Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo.

Finalmente, la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»^[16].

3. Protección de Derechos Fundamentales: En el marco de un concurso de méritos, está en juego el derecho de acceso al trabajo. Por lo tanto, el concurso debe ser visto con rigor constitucional, y las controversias sobre la protección de derechos fundamentales deben ser resueltas de manera pronta y eficaz, lo cual generalmente se logra a través de la tutela^[17].

4. Regla General de Improcedencia y Excepciones: Aunque la regla general es la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos que reglamentan concursos de méritos, existen excepciones cuando se trata de proteger derechos fundamentales en situaciones concretas que afectan los presupuestos del Estado social de derecho^[18].

En resumen, la acción de tutela puede ser procedente en concursos de méritos cuando se busca proteger derechos fundamentales y no existe otro medio judicial eficaz. Sin embargo, su uso debe ser excepcional y justificado por la urgencia y la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.

PRETENSIONES

DE CONFORMIDAD A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE REPONER EL AUTO FECHADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y ASUMIR CONOCIMIENTO INMEDIATO CON LA PRONTITUD QUE REQUIERE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL Y OTORGAR LA MEDIDA CAUTELAR.

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES

AL ACCIONANTE: Calle 53D #19-77 Barranquilla Atlántico.

Mail: jriveratejada@hotmail.com.

Celular: 3008397537



Jorge Arturo Rivera Tejada

Derecho Laboral Individual y Colectivo, Administrativo Laboral, Laboral Constitucional

jriveratejada@hotmail.com

Celular: 3008397537

De: Juzgado 03 Laboral Circuito - Atlántico - Barranquilla <lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado el: miércoles, noviembre 20, 2024 12:21 PM

Para: Notificaciones Tutelas Civil <notificacionestutelacivil@cortesuprema.gov.co>; jriversejada@hotmail.com

Asunto: NOTIFICACIÓN AUTO REMITE POR REGLAS DE REPARTO TUTELA 2024-10020

Importancia: Alta

Barranquilla, 20 de noviembre de 2024.

SEÑORES:

ASUNTO: NOTIFICACIÓN AUTO REMITE POR REGLAS DE REPARTO TUTELA RAD: 2024-10020

CORDIAL SALUDO:

Por medio del presente y en cumplimiento a lo ordenado en la providencia adjunta, se les notifica la misma, a la luz del artículo 16 del decreto 2591 de 1991.

Se adjunta a la presente, copia de la providencia y piezas procesales del expediente.

Atentamente,

GRAYZHELL QUINTERO
OFICIAL MAYOR.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

[1] Auto 550 de 2018. En virtud del factor territorial, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o donde se producen sus efectos, son competentes para conocer, “a *prevención*”, del trámite de las acciones de tutela.

[2] Auto 550 de 2018. Con fundamento en el factor subjetivo, corresponde: (i) a los jueces del circuito, el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas en contra de los medios de comunicación y (ii) al Tribunal para la Paz, tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz.

[3] Auto 550 de 2018. El factor funcional “*debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una sentencia de tutela, lo cual implica, que únicamente podrán conocer del asunto, las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente, en los términos establecidos en la jurisprudencia*”.

[4] Auto 018 de 2019. Cfr. Autos 222 y 010 de 2020, 068 de 2018 y 053 de 2018, entre otros.

[5] Autos 074 de 2016 y 277 de 2002.

[6] CE-11001-03-15-000-2014-03142-01(AC)-2015 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B

Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil quince (2015) Actor: MARTHA YULIANA CUENCA SANCHEZ

[7] CE-11001-03-15-000-2014-03437-00(AC)-2015, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO (E) Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) Actor: JEFERSON ALEXANDER CRUZ HERRERA

[8] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil doce (2012) Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01917-01(AC) Actor: RUBEN DARIO MAYA BEDOYA

[9] CE-05001-23-33-000-2017-00471-01(AC)-2017 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00471-01(AC) Actor: LEIDY MILENA VILLADA FERNÁNDEZ

[10] CE-25000-23-41-000-2014-00904-01(AC)-2014, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-41-000-2014-00904-01(AC) Actor: LUIS ALBERTO SANDOVAL NAVAS Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

[11] <https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnofiticeUID%3dCO1.NTC.991325%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse>

[12] Argumento que desarrollé y probé en la solicitud de la medida cautelar.

[13] Exposición sobre el impacto de la selección de jueces por sistema de méritos en la independencia judicial hecha por la Dra. Tania Luna Blanco el 19 de noviembre de 2024 que puede consultar en <https://drive.google.com/file/d/1oYk6qtE8gMqddIMUotaGkauWfKyolXk4/view?usp=sharing> o en <https://www.youtube.com/live/XXKhFY7Cjg> a partir del minuto 2.50.

[14] Casos en el sistema interamericano, **1. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá Ficha técnica**
2. Tribunal Constitucional Vs. Perú 3. Caso Apitz Barbera y otros Ficha técnica y 4.

Reverón Trujillo Vs. Venezuela

[15] <https://www.dejusticia.org/independencia-judicial-y-democracia/>

[16] En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.

[17] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., cinco (5) de abril de dos mil trece (2013). Radicación número: 41001-23-31-000-2012-00200-02(AC) Actor: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA

[18] CE-11001-03-15-000-2019-00477-00(AC)-2019 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00477-00(AC) Actor: AUSBERTO RODRÍGUEZ MORA Demandado: PRESIDENTE DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ Y DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO
DERECHO CONSTITUCIONAL LABORAL, ADMINISTRATIVO LABORAL, DERECHO DE TRANSITO

CARTAGENA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Juzgado 03 Laboral - Atlántico - Barranquilla lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. M

RADICACIÓN: 08001310500320241002000

DEMANDANTE: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DEMANDADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.346.928 de Barranquilla, interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO FECHADO 20 DE OCTUBRE EN EL CUAL REMITEN A LA CORTE SUPREMA**,

I. Competencia del juzgado del circuito

Me permito exponer los argumentos por los cuales la competencia de esta acción de tutela corresponde al Juez del circuito de la jurisdicción ordinaria de la ciudad de Bucaramanga.

1. **Factores de competencia en relación con acciones de tutela.** La Corte reitera en auto A 191 de 2021 que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, **existen exclusivamente tres factores de competencia** en materia de tutela, a saber: (i) el *factor territorial*¹, (ii) el *factor subjetivo*² y (iii) el *factor funcional*³. Al respecto, la **Corte de cierre constitucional ha sostenido que, cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, “en virtud del criterio a prevención”**⁴, previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Esto, por cuanto “*existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover*”⁵.

Manifiesto que vivo en Barranquilla y mi elección de lugar de presentación de pruebas y sede es Barranquilla.

¹ Auto 550 de 2018. En virtud del factor territorial, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o donde se producen sus efectos, son competentes para conocer, “a prevención”, del trámite de las acciones de tutela.

² Auto 550 de 2018. Con fundamento en el factor subjetivo, corresponde: (i) a los jueces del circuito, el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas en contra de los medios de comunicación y (ii) al Tribunal para la Paz, tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz.

³ Auto 550 de 2018. El factor funcional “*debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una sentencia de tutela, lo cual implica, que únicamente podrán conocer del asunto, las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente, en los términos establecidos en la jurisprudencia*”.

⁴ Auto 018 de 2019. Cfr. Autos 222 y 010 de 2020, 068 de 2018 y 053 de 2018, entre otros.

⁵ Autos 074 de 2016 y 277 de 2002.

2. Tutela contra autoridad administrativa que goza de autonomía administrativa y de ejecución del nivel nacional debe ser repartida a los circuitos. No se demanda al Consejo Superior de la Judicatura.

Manifiesto que esta demanda **no está dirigida contra el Consejo Superior de la Judicatura** por que las pretensiones del amparo constitucional son de exclusivo resorte y autonomía de la EJLB, pues los hechos que acá se discuten tiene exclusiva relación con la calificación de la subfase general del IX curso de Formación Judicial y sus efectos. Actuación administrativa que el Consejo Superior ni siquiera conoce en segunda instancia. Si bien el Consejo Superior reglamentó la Convocatoria 27 y el IXCurso, no estoy demandando esa reglamentación o sus efectos.

Frente a la naturaleza como autoridad administrativa de la EJLB, la ley 270 Estatutaria de Administración de Justicia establece:

ARTÍCULO 177. ESCUELA JUDICIAL. La Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla», hará parte del Consejo Superior de la Judicatura, junto con su planta de personal, a partir del primero de enero de 1998 y se constituirá en el centro de formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio de la Administración de Justicia.

El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará su funcionamiento.

...

(Expresiones "la respectiva Sala", y "la Sala Administrativa del Consejo Superior" sustituidas por el artículo 88 de la ley 2430 de 2024)

A su vez el Consejo Superior de la Judicatura reglamentó la naturaleza de la EJLB como es una unidad administrativa del CSJ que goza de **autonomía administrativa y de ejecución** mediante el Acuerdo 800 de 2000 vigente sin modificaciones según lo establece la relatoría del CSJ en <https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/web/Acto%20Administrativo/Default.aspx?ID=5548> , veamos:

ARTICULO PRIMERO.- Naturaleza. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 de la Ley 270 de 1996, es una unidad administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adscrita a la Sala Administrativa.

ARTICULO QUINTO.- Autonomía administrativa y de ejecución. La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, gozará de la autonomía administrativa, técnica, de ejecución y del gasto para el desarrollo del Plan Anual de Formación y Capacitación de la Rama Judicial previamente aprobado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, podrá delegar en el Director de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, la celebración de todos los negocios jurídicos que se requieran para el cumplimiento de los programas y actividades que forman parte del mencionado plan, en los términos utilizados para los Directores Seccionales de Administración Judicial.

Delo hasta acá expresado se concluye que la directora de la Escuela no es magistrada, ella representa una autoridad administrativa de la naturaleza ya citada.

Las reglas de reparto contenidas en **DECRETO 333 DE 2021** "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del **Decreto 1069 de 2015**, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela" en su artículo ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. determinan:

ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo [37](#) del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

(...)

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

(...)

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción ordinaria. En los demás casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela serán conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

La reglamentación antes citada determina que las tutelas dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, en razón a que pretende proteger el rango de un alto tribunal de rango nacional. Pero siendo esta demanda dirigida en contra de la EJLB esa regla no debe ser aplicada pues esta es una **autoridad administrativa** que no tiene la categoría de alto tribunal de rango nacional.

En el contexto de la acción de tutela, **autoridad administrativa** se refiere a cualquier entidad o dependencia del Estado que, en el ejercicio de sus funciones oficiales, pueda afectar los derechos fundamentales de las personas. Esto incluye a entidades o dependencias que emiten actos administrativos, los cuales son manifestaciones de voluntad de la autoridad que buscan producir efectos jurídicos particulares o generales.

La reglamentación de la acción de tutela, sus normas procesales no entienden autoridad administrativa de manera general y en esa categoría están incluidas entidades o dependencia adscritos o vinculadas, pues estas naturalezas no son tenidas en cuenta por el procedimiento de la acción de tutela. La característica que hace que una autoridad administrativa sea demandada en acción de tutela es su capacidad de afectar derechos fundamentales. En el caso que nos convoca como se ha dicho demandando exclusivamente a la EJLB como autoridad administrativa, con la capacidad de afectar mis derechos fundamentales de manera autónoma y sin intervención de la entidad a la que es adscrita.

Asuntos de procedibilidad.

La procedibilidad de la acción de tutela en el contexto de concursos de méritos es un tema que ha sido abordado por la jurisprudencia, especialmente por la Corte Constitucional (SU 068 de 2022 expedida por hechos de este mismo concurso) y el Consejo de Estado (citadas en el pido página). La tutela es viable cuando se presenta una flagrante violación de derechos

fundamentales, como el derecho al trabajo, la igualdad, y el debido proceso, en el marco del concurso de méritos⁶

1. **Excepcionalidad de la Tutela:** La acción de tutela es un mecanismo excepcional que puede proceder en el contexto de concursos de méritos cuando se busca proteger derechos fundamentales que han sido vulnerados y no existe otro medio judicial eficaz para hacerlo de manera rápida y urgente. Esto es particularmente relevante cuando no se ha configurado una lista definitiva que reconozca derechos subjetivos de los participantes⁷.
2. **Subsidiariedad e Inmediatez:** La tutela como sabemos solo procede cuando no hay otro medio de defensa judicial disponible, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un **perjuicio irremediable** *Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable..* Además, debe ser un instrumento de protección inmediata para garantizar la guarda efectiva de los derechos fundamentales⁸. O cuando se requiere como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La tutela es procedente cuando los medios judiciales ordinarios no garantizan la inmediatez y eficacia necesarias para proteger los derechos fundamentales involucrados, debido a la complejidad y duración de los procesos contenciosos administrativos⁹ La tutela puede proceder cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar irremediablemente afectados los derechos fundamentales del solicitante¹⁰.

Tenga en cuenta **señor(a) juez que de no ingresar prontamente**, así sea de manera transitorio al Subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial, perderé la oportunidad acceder al servicio publico en las cargos ofertados porque un proceso ordinaria demoraría más de una año y esta subfase terminaría en agosto del año entrante, porque que aunque la justicia ordinaria conceda las pretensiones es un sobre costo para el estado volver a abrir un curso de formación máxime cuando este ha generado un costo de 14.mil millones de pesos¹¹ y en el hay capacidad contrata para 3459 beneficiarios y en la actualidad en la subfase especializada son beneficiarios de del IX Curso entre 1500

6 CE-11001-03-15-000-2014-03142-01(AC)-2015 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B
Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil quince (2015) Actor: MARTHA YULIANA CUENCA SANCHEZ

7 CE-11001-03-15-000-2014-03437-00(AC)-2015, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO (E) Bogotá, D.C., veintidós (22) de enero de dos mil quince (2015) Actor: JEFERSON ALEXANDER CRUZ HERRERA

8 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil doce (2012) Radicación número: 05001-23-31-000-2011-01917-01(AC) Actor: RUBEN DARIO MAYA BEDOYA

9 CE-05001-23-33-000-2017-00471-01(AC)-2017 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 05001-23-33-000-2017-00471-01(AC) Actor: LEIDY MILENA VILLADA FERNÁNDEZ

10 CE-25000-23-41-000-2014-00904-01(AC)-2014, CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO Bogotá, D.C., tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-41-000-2014-00904-01(AC) Actor: LUIS ALBERTO SANDOVAL NAVAS Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

11

<https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fcommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.991325%26isFromPublicArea%3dTrue%26isModal%3dFalse>

y 2000 concursantes, se puede concluir que mi inclusión transitoria en el IX curso no afecta fiscalmente a la entidad¹².

LA SU 067 de 2022 expedida por hechos generados por este mismo concurso advierte que es procedente acción de tutela cuando **existe un planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo**. Advierto señor juez que el conflicto constitucional que acá se discute tiene dos asuntos constitucionales que desbordan las competencias del juez administrativo, veamos:

El primero es sobre el cumplimiento de una cláusula constitucional contenida en el Art. 125 superior que obliga a que los cargos de jueces y magistrados de tribunales deben ser seleccionados por sistema de méritos. Cabe resaltar señor(a) juez que los actuales aprobados de la convocatoria 27 no alcanzaran para proveer la totalidad de las actuales vacantes.

El segundo problema de relevancia constitucional es la materialización de la independencia judicial¹³, como garantía del estado de derecho o derecho humano contenido en el 228 superior. El precedente del SIDH ha establecido que la independencia judicial es un derecho humano autónomo de los justiciables, que materializa la expedición de decisiones justas. La independencia judicial es una garantía institucional e instrumental, pues de ella depende la garantía de otros derechos, como el de acceso a la justicia y al debido proceso¹⁴.

El SIDH desarrolla estándares de la independencia judicial entre ellos los siguientes:

1. Adecuados procesos de nombramiento con garantías de objetividad y por sistema de méritos. En 2009 la Relatoría especial misión Colombia para la independencia alertó sobre los índices de provisionalidad y los sistemas de méritos, para la época (2009) sobre todo en Fiscalía General de la Nación¹⁵. Se advierte que en la actualidad más o menos la tercera parte de los cargos de jueces están en provisionalidad. Las altas provisionalidades en la justicia no le dan garantía al operador judicial en el ejercicio de función.
2. Inamovilidad en el cargo: la provisionalidad impone en el juez una carga de eventual remoción del cargo, afectando con ello la independencia judicial, en Colombia se ha detectado que los jueces en propiedad no logran llegar a ser magistrados de alta Corte. Las recomendaciones de la relatoría por la independencia judicial antes citada expresaron al respecto:

¹² Argumento que desarrollé y probé en la solicitud de la medida cautelar.

¹³ Exposición sobre el impacto de la selección de jueces por sistema de méritos en la independencia judicial hecha por la Dra. Tania Luna Blanco el 19 de noviembre de 2024 que puede consultar en <https://drive.google.com/file/d/1oYk6qtE8gMqddIMUotaGkauWfKyoLXk4/view?usp=sharing> o en <https://www.youtube.com/live/XXKhFY7Cijg> a partir del minuto 2:50.

¹⁴ Casos en el sistema interamericano, 1. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá Ficha técnica

2. Tribunal Constitucional Vs. Perú 3. Caso Apitz Barbera y otros Ficha técnica y 4. Reverón Trujillo Vs. Venezuela

¹⁵ <https://www.dejusticia.org/independencia-judicial-y-democracia/>

e) En lo que respecta a la seguridad en el cargo, la inamovilidad, las medidas disciplinarias y la inmunidad:

- i) Debe irse progresivamente incrementando el número de jueces y fiscales con nombramientos permanentes;
- ii) Debe reducirse la participación de personas ajenas a la Rama Judicial en el nombramiento de jueces y fiscales;
- iii) Debe establecerse garantías específicas para asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales durante el período de prueba posterior a su nombramiento;
- iv) Debe asegurarse la inamovilidad de Magistrados, jueces y fiscales;

A/HRC/14/26/Add.2
Página 29

- v) Deben desarrollarse criterios para el retiro de Magistrados y jueces;
- vi) Toda decisión relativa a la imposición de una medida disciplinaria debe ser motivada, pública y sujeta a revisión.

3. Garantía contra presiones externas, Colombia tiene alertas al respecto. Medios de comunicación, el gobierno, otros jueces. Se detectaron casos de jueces destituidos por una causal disciplinaria que se denominaba “error judicial inexcusable”

Como podrá apreciarse señor juez constitucional el amparo de estos dos asuntos constitucionales no es de competencia del juez administrativo. Y menos en lo relacionado con los concretos hechos que acá expongo y desde la individualidad, pues la pretensión que me ampararía mis derechos tendría como finalidad demandar al legalidad de 2 actos administrativos que me calificaron el examen de la subfase general con la finalidad de aprobar esta subfase o demandar todo la actuación administrativa llamada IX curso de Formación Judicial con los costos fiscales que ello implique.

En su momento la **SU 067 de 2022** considero procedente la acción de tutela y expresó:

Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos fundamentales»¹⁶.

¹⁶ En ambos casos, la Corte revisó dos acciones de tutela de personas que habían sido excluidas de sendos concursos de méritos como consecuencia de razones que comprometían sus derechos fundamentales: en un caso, la exclusión se basó en el hecho de que el concursante tenía un tatuaje en su cuerpo; mientras que en el otro la determinación se basó en la estatura del aspirante. En opinión de la Corte, tales controversias excedían el ámbito de competencia de la jurisdicción de lo contencioso

- 3. Protección de Derechos Fundamentales: En el marco de un concurso de méritos, está en juego el derecho de acceso al trabajo. Por lo tanto, el concurso debe ser visto con rigor constitucional, y las controversias sobre la protección de derechos fundamentales deben ser resueltas de manera pronta y eficaz, lo cual generalmente se logra a través de la tutela¹⁷.
- 4. Regla General de Improcedencia y Excepciones: Aunque la regla general es la improcedencia de la tutela para controvertir actos administrativos que reglamentan concursos de méritos, existen excepciones cuando se trata de proteger derechos fundamentales en situaciones concretas que afectan los presupuestos del Estado social de derecho¹⁸.

En resumen, la acción de tutela puede ser procedente en concursos de méritos cuando se busca proteger derechos fundamentales y no existe otro medio judicial eficaz. Sin embargo, su uso debe ser excepcional y justificado por la urgencia y la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.

PRETENSIONES

DE CONFORMIDAD A LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE REPONER EL AUTO FECHADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y ASUMIR CONOCIMIENTO INMEDIATO CON LA PRONTITUD QUE REQUIERE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL Y OTORGAR LA MEDIDA CAUTELAR.

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES

AL ACCIONANTE: Calle 53D #19-77 Barranquilla Atlántico.
Mail: jriveratejada@hotmail.com.
Celular: 3008397537


JORGE ARTURO RIVERA TEJADA
C.C 72.346.928 de Barranquilla
T.P 240.432 del C.S.J

administrativo, pues planteaban un estricto problema de constitucionalidad, y no de legalidad. Por tal motivo, estimó procedente la solicitud de amparo.

17 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, D.C., cinco (5) de abril de dos mil trece (2013). Radicación número: 41001-23-31-000-2012-00200-02(AC) Actor: JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA

18 CE-11001-03-15-000-2019-00477-00(AC)-2019 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER Bogotá, D. C., veintinueve (29) de abril de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00477-00(AC) Actor: AUSBERTO RODRÍGUEZ MORA Demandado: PRESIDENTE DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ Y DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA